

El gobierno de Michelle Bachelet: las perspectivas de cambio

Tomás Moulian*

Moulian, Tomás. El gobierno de Michelle Bachelet: las perspectivas de cambio. En publicación: OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VI, no. 19. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina: Argentina. julio. 2006 1515-3282.

Acceso al texto completo: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/sur.pdf>

** Director
del Centro
de Investigaciones
Sociales
de la Universidad
ARCIS,
Santiago de Chile,
Chile.
Integrante
del Comité Directivo
de CLACSO.*

El objetivo de este artículo es analizar los desafíos particulares que enfrenta el gobierno de Michelle Bachelet. Pero como punto de partida hay que realizar una serie de operaciones preliminares de caracterización de la transición y también de la alianza gobernante.

Recapitulación: la diferencia de temporalidades políticas

La Concertación, que gobierna desde 1990, ha estabilizado el ritmo y cambiado la temporalidad política que había primado en Chile en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 hasta 1973. Ese período se caracterizó por el paso vertiginoso de una opción presidencial a otra, transcurriendo desde el populismo ibaísta de 1952, pasando por la tentativa de desarrollo capitalista ortodoxa bajo el mandato de Jorge Alessandri en 1958, al reformismo radical de Eduardo Frei en 1964, para finalmente llegar a la "vía chilena al socialismo", después de la

cual viene el quiebre provocado por la dictadura en 1973. Como puede verse, desde la segunda administración de Ibáñez hasta Allende ninguna opción logra durar más de un período presidencial, lo cual significa que se salta de un conjunto de medidas a otras. Las diferentes opciones se suceden, generando la impresión de atropellamiento y falta de organicidad, pues no hay tiempo para que las estrategias puedan profundizarse.

Esta inestabilidad de los proyectos de gobierno tiene relación con la estructura del campo de fuerzas existente. En el período comprendido entre 1952 y 1973 no existe un partido intermedio flexible, capaz de contraer alianzas con la izquierda y de modificarlas en el momento en que la tensión política amenazaba con tornarse crítica, fenómeno que sí ocurrió en la etapa estable transcurrida entre 1938 y 1952. En ese período hay escasa polarización, porque el campo de fuerzas se caracteriza por una alta propensión coalicional, provista en especial por el comportamiento del centro.

Por el contrario, todas las opciones desplegadas durante el período inmediatamente posterior, entre 1952 y 1973, son víctimas de la baja propensión coalicional, que afectó sobre todo a la corta fase transcurrida entre 1970 y 1973. La única salida del turbulento momento inmediatamente anterior al golpe hubiese sido una alianza entre la coalición gobernante y la Democracia Cristiana, pero ella no fue posible pese al temor de una ruptura.

La Concertación, coalición minimalista

La Concertación es una coalición estable que ha logrado sobrevivir a cuatro elecciones presidenciales, triunfando sobre las opciones de la derecha (especialmente fuertes en las dos últimas). Se trata de una coalición que unifica al centro demócrata cristiano con una parte de la izquierda, la más significativa desde el punto de vista electoral, reviviendo así la situación colaborativa, de alta propensión coalicional, que existió entre 1938 y 1952. En los dos últimos comicios presidenciales esta alianza enfrentó una experiencia por la que no pasaron las coaliciones de centro izquierda de las primeras décadas del siglo XX. Se trata de la sustitución del centro como la fuerza proveedora del líder presidencial, sin que eso haya significado hasta ahora ni el retiro de la coalición del Partido Demócrata Cristiano, ni una pérdida notoria de votos centristas en las elecciones presidenciales.

La libertad política se obtuvo en 1990 sin mediar una reestructuración de las Fuerzas Armadas y con la manutención hasta 1998 de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército. Esa situación del campo de fuerzas ha servido de argumento justificatorio para la instalación por parte de la Concertación de un programa de carácter minimalista, caracterizado por los siguientes rasgos:

- a) un tratamiento débil de los derechos humanos, que evita los gestos rupturistas –como proponer la derogación de la ley de amnistía impuesta por la dictadura– y coloca el énfasis principal en las grandes operaciones simbólicas de reconocimiento estatal de las víctimas de desaparición y fusilamiento (Informe Rettig) y de las víctimas de torturas (Informe Valech);
- b) un plan suave de reformas políticas que no ha contemplado la convocatoria de una Asamblea Constituyente o la derogación de la constitución del '80, y que postergó hasta fines del gobierno de Lagos la eliminación de los senadores designados, y hasta el gobierno de Michelle Bachelet la discusión sobre el sistema binominal, que impide la representación de partidos minoritarios;
- c) una obstinada estrategia de manutención y perfeccionamiento de las políticas macroeconómicas, de las opciones de desarrollo y del modelo de políticas sociales de carácter neoliberal, a las cuales sólo se le han realizado cambios optimizadores;
- d) una política exterior cuyo objetivo básico es la firma de acuerdos de libre comercio con las grandes potencias, creyendo con eso alcanzar un lugar en la globalización.

La Concertación, propulsora del modelo chileno de transición, ha asumido la tarea de aclimatar al sistema neoliberal a una sociedad con competencia política democrática. No ha modificado la política económica ni el modelo de desarrollo. Ha logrado imponerse a la derecha como una opción alternativa, pese a que ha liderado una política económica y social de continuidad con respecto al modelo que se impuso durante la dictadura.

El zafarrancho del cambio

Pese a que hasta el momento la Concertación se ha movido con lentitud y mucha moderación en materia de cambios, el gobierno de Michelle Bachelet se ha iniciado con citando múltiples y diversas esperanzas.

¿Qué se espera al suponerlo capaz de introducir cambios? Es importante distinguir entre cambios incrementales y cambio reformadores. Los primeros consisten en modificaciones destinadas a maximizar u optimizar el funcionamiento de un tipo de política. Los cambios reformadores, por el contrario, buscan cuestionar la política vigente y reemplazarla por otra de signo distinto. En el tema de la seguridad social, por ejemplo, un cambio reformador sería aquel que busca cuestionar la lógica del sistema, pretendiendo la modificación de su principio ordenador: la capitalización individual. Un cambio incremental sería aquel que abarca aspectos secundarios, por ejemplo el ahorro en gastos administrativos, que se puede obtener a través de ajustes, entre ellos una mayor competencia. Ese último es sin duda un cambio que incluso puede tener un carácter equita-

tivo, pero resultará parcial al no modificar ninguno de sus elementos esenciales y distintivos. Todos los gobiernos, incluidos los conservadores, introducen cambios, aunque sólo sea para adaptar los sistemas a nuevas condiciones o para optimizar el funcionamiento.

La Concertación ha buscado la democratización en el terreno político, pero manteniendo los rasgos fundamentales del modelo económico y social impuesto por la dictadura. Los tres primeros gobiernos de la Concertación han seguido esta política. No lo han hecho por accidente, sino porque están de acuerdo en que el funcionamiento económico debe estar regido por la lógica del mercado, y el Estado debe tener un papel sólo subsidiario.

El gran cambio ideológico producido durante el período de la dictadura ha sido el alineamiento neoliberal del principal partido centrista, la Democracia Cristiana, y los principales partidos de izquierda. Basándose sin embargo en que había diferencias entre el centro y la izquierda, se creyó que con la elección de Ricardo Lagos comenzaba una nueva etapa, en la cual se mostraría que las soluciones neoliberales representaban sólo lo posible pero no lo deseable.

Sin embargo, el énfasis de ese gobierno fue mostrar que se realizaba una política de continuidad; que era un gobierno que actuaba con eficacia en el marco de las restricciones existentes. Así, la primera administración socialista de la nueva etapa se auto-concibe cumpliendo las metas, porque funciona con normalidad, como un gobierno más de la Concertación. Su éxito reside en ser lo mismo, no en ser un gobierno distinto, de orientación progresista. El presidente socialista Ricardo Lagos consiguió terminar su período elogiado por los empresarios, la antítesis de los mil días de Salvador Allende. Con ese final se supera el trauma: un presidente de izquierda puede gobernar sin actuar como un desquiciador, sin que con él llegue el caos.

Hasta el momento, cada uno de los gobiernos de la Concertación ha mantenido la estrategia de reproducción del modelo socio-económico, absteniéndose de la realización de reformas importantes. Esa modalidad era comprensible durante la primera presidencia de Patricio Aylwin, en la cual no se conocían los márgenes de maniobra, pero se mantuvo en los dos gobiernos posteriores, que se abocaron a promover la modernidad mucho más que a desarrollar la democratización. De hecho, el gobierno de Ricardo Lagos se caracterizó por el enorme desarrollo de obras de infraestructura y por la multiplicación de los tratados comerciales. Dejó pendientes las reformas generadoras de mayor equidad (con excepción de los cambios de los procedimientos penales), mostrando con eso que hay una comunidad de propósitos respecto al carácter de los gobiernos de la Concertación.

Los primeros días del corto período de Michelle Bachelet han mostrado claros signos de continuidad. La selección de importantes personeros liberales en los ministerios clave

–Hacienda y Obras Públicas–, las políticas de sofocamiento de las movilizaciones estudiantiles, y el enfoque adaptativo, y por tanto restringido, en materia de subcontratación, revelan el alcance de su proyecto.

En todo caso, la presidenta ha puesto en marcha procedimientos nuevos para la generación de políticas públicas que terminarán siendo discutidas por el Parlamento. Se trata del sistema de nombramiento de comisiones amplias y plurales encargadas de proponer políticas, hasta ahora en materia relacionadas con el régimen de pensiones, con el sistema electoral binominal y con el Ministerio de Seguridad Pública. Estas iniciativas aparentan otorgarle una base deliberativa a la preparación de políticas públicas. Pero para que una discusión destinada a preparar propuestas sobre políticas previsionales, por ejemplo, adquiera esa dimensión, no solamente se requiere que convoque a una variedad plural de participantes, sino también que se proponga discutir y poner en cuestión los fines y objetivos. Las comisiones creadas por Michelle Bachelet en realidad invitan a discutir sólo a los críticos moderados, y no a aquellos que cuestionan los principios básicos. Por tanto, las propuestas de reforma serán meramente adaptativas, y las comisiones serán instancias legitimadoras más que otra cosa.

Sobre el problema de los cambios que podría introducir el corto gobierno de la presidenta Bachelet, nada hace presagiar que sean posibles variaciones fundamentales. Como se ha dicho, la política de la Concertación ha sido básicamente reproductora del modelo socio-económico impuesto por la dictadura, decisión que no fue la resultante de proyectos personales de los presidentes. Se trata de una estrategia de la coalición y de los partidos que forman parte de ella, que han desarrollado estas políticas desde 1990.

Pese a la parquedad de los resultados, que se revelan en los elevados índices de desigualdad, en el campo electoral la Concertación sigue movilizando a sectores muy importantes de la ciudadanía, cosa que no consiguen los grupos más izquierdistas que sí intentan asumir el problema central. Esta evidencia es muy significativa, porque muestra que las políticas llevadas a cabo consiguen integrar diferentes sectores, pese a que no abordan ni pueden abordar la cuestión de las desigualdades. Pese a las apariencias, el gobierno de Michelle Bachelet mantendrá la misma estrategia de sus predecesores, lo que permitirá nuevamente que en la próxima elección presidencial el candidato de la derecha pueda entrar a disputar sobre el problema de la desigualdad, ya que la igualdad volverá a ser lo que falte.